

## Implicaciones anticipadas de las órdenes de EE.UU de detener labores y recortes posteriores

### CONTEXTO: SUSPENSIÓN DE LA AYUDA EXTERIOR FINANCIADA POR EE.UU.

El 20 de enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva con la que ordenaba la suspensión por 90 días de la ayuda exterior financiada por Estados Unidos, incluidas las operaciones humanitarias (WH 20/01/2025). El 24 de enero, el Gobierno comenzó a emitir órdenes de detener labores y a suspender el inicio de nuevos programas de ayuda. Para el 7 de febrero, habían puesto a la mayor parte del personal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en licencia administrativa, y sólo el personal esencial siguió activo (CNN 05/02/2025). Aunque el 28 de enero se concedió una exención para permitir la asistencia humanitaria vital, la implementación ha sido limitada y se ha aplicado de forma inconsistente en diferentes contextos (Reuters 29/01/2025). A pesar de los continuos desafíos legales a la congelación de fondos, las organizaciones humanitarias de todo el mundo ya habían reportado interrupciones significativas en sus operaciones el 20 de febrero (ACAPS 21/02/2025; HRW 10/02/2025; NYT 07/02/2025).

Colombia enfrenta una crisis humanitaria compleja y de larga data, impulsada por décadas de conflicto armado. Hasta febrero de 2025, más de 9,88 millones de personas habían sido registradas como víctimas del conflicto (UARIV 28/02/2025). Para marzo de 2025, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) había identificado ocho conflictos armados internos en el país, basándose en criterios del derecho internacional humanitario (CICR 25/03/2025). Estos múltiples conflictos se intensificaron en gran medida por la expansión y fragmentación de los grupos armados no estatales (GANE), especialmente en las zonas rurales con presencia estatal limitada (OCHA 21/03/2025).

En 2023, más de 2,1 millones de personas (4,1%) en Colombia se identificaban como indígenas y más de 3,9 millones (7,5%) como afrocolombianos (DANE 24/04/2024). Se dispone de poca información sobre las implicaciones humanitarias de la congelación de la financiación estadounidense, en particular para las comunidades étnicas que viven en zonas rurales remotas con presencia de GANE. La exposición de estas comunidades a riesgos de protección es desproporcionada. En 2024, el 39% de las personas afectadas por el confinamiento eran indígenas, mientras que el 33% de los desplazados en eventos masivos eran afrocolombianos (OCHA 03/02/2025).

Estas dinámicas aumentan el riesgo de escalada de violencia e incidentes de protección, como desplazamientos masivos e individuales, confinamientos, restricciones de movilidad y amenazas, que también conducen a necesidades humanitarias de salud, seguridad alimentaria y otras. La situación humanitaria en Colombia es preocupante, ya que la congelación de los fondos de Estados Unidos agrava la capacidad de respuesta que ya era difícil debido a las múltiples emergencias superpuestas relacionadas con el complejo y prolongado conflicto armado del país (OCHA 21/03/2025).

### TABLE OF CONTENTS

Contexto: suspensión de la ayuda exterior financiada por EE.UU. ....	1
Panorama: efectos anticipados sobre el financiamiento y las necesidades humanitarias en Colombia .....	2
Acerca de este informe .....	3
Posibles efectos en las necesidades .....	3
Protección .....	4
Seguridad alimentaria y nutrición .....	5
Salud .....	6
WASH .....	7
Alojamiento .....	7
Factores agravantes .....	8
Clima y peligros naturales .....	8
Expansión y fragmentación de los GANE .....	8
Acuerdo de paz y derechos a la tierra .....	9
Políticas adicionales de EE. UU. ....	9
Acceso humanitario y limitaciones operativas .....	10

## PANORAMA: EFECTOS ANTICIPADOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO Y LAS NECESIDADES HUMANITARIAS EN COLOMBIA

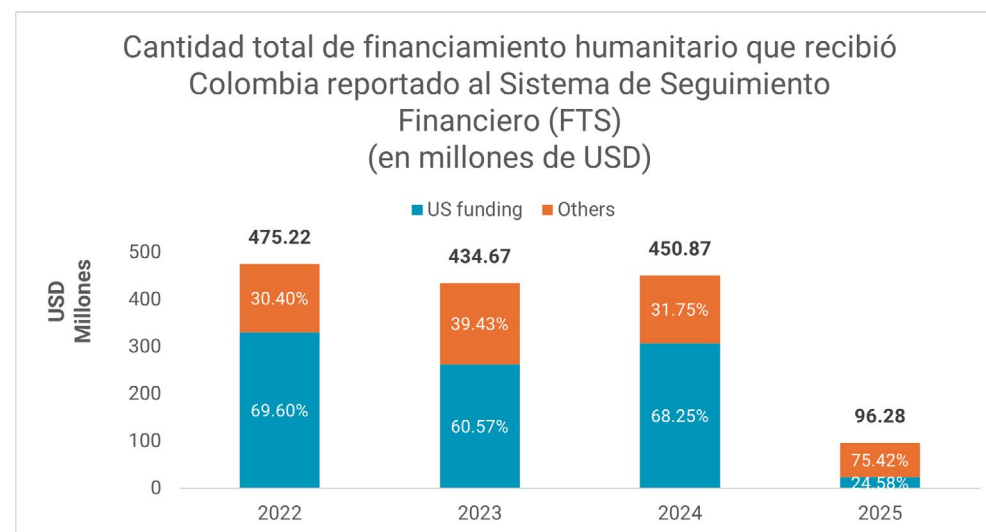
Desde 2018, Estados Unidos es el principal donante de asistencia humanitaria de Colombia. Solo en 2024, las contribuciones de Estados Unidos alcanzaron los 307,7 millones de dólares, lo que representa el 68% del total de los fondos humanitarios que recibió Colombia ese año, según el Servicio de Seguimiento Financiero (FTS). Esta cifra evidencia hasta qué punto la respuesta humanitaria de Colombia depende del apoyo financiero de Estados Unidos (FTS consultado 28/03/2025).

En 2024, USAID desembolsó al menos 80,58 millones de dólares a organizaciones de la ONU como el PMA y la OIM (Asistencia Extranjera consultado 15/04/2025). Hasta principios de 2025, OCHA también registró a Estados Unidos como su principal donante, con 10 millones de dólares en contribuciones. Los desembolsos hasta marzo de 2025 a las organizaciones de las Naciones Unidas ascendieron a aproximadamente 5,2 millones de dólares, una caída significativa en comparación con 2024. No está claro si estas cifras reflejan retrasos en los desembolsos o incluyen exenciones para la “asistencia humanitaria que salva vidas” (The Guardian 10/03/2025; Asistencia Extranjera consultado 15/04/2025).

Se espera que la congelación de la financiación humanitaria estadounidense perjudique seriamente a las poblaciones afectadas por los conflictos armados, la movilidad humana y los peligros climáticos. Se estima que 294 millones de dólares en asistencia planificada ya no llegarán a las aproximadamente 8,5 millones de personas necesitadas (3is/Foro de ONG Humanitarias 14/03/2025). En total, se proyecta que las ONG en Colombia perderán cerca de USD 216 millones (3is/Foro de ONG Humanitarias 14/03/2025; OCHA 17/03/2025).

También se espera que la suspensión de la financiación aumente los riesgos de protección a lo largo de 2025, especialmente en las zonas afectadas por la presencia de GANE. Según el Plan de Respuesta y Necesidades Humanitarias 2025 (HNRP por sus siglas en inglés), dos millones de los 9,1 millones de personas necesitadas son las más expuestas a los conflictos armados (EIC 20/03/2025; OCHA 22/01/2025). Los problemas de protección, como el reclutamiento de niños, la violencia basada en género (VBG), la contaminación por minas terrestres, el desplazamiento forzado y las restricciones a la movilidad impuestas por los GANE (por ejemplo, el uso de amenazas, puestos de control o la destrucción de carreteras que limitan el acceso a bienes o servicios esenciales) siguen siendo fundamentales (OCHA 03/03/2021). Sin una financiación adecuada, es probable que las emergencias a gran escala y las necesidades humanitarias persistan o se intensifiquen. Determinar el impacto total de la congelación de fondos es complejo, ya que sus consecuencias se desarrollarán en diferentes niveles de la respuesta humanitaria a corto, mediano y largo plazo.

Figura 1. Cantidad total de financiamiento humanitario que recibió Colombia entre 2022 y 2025



Fuente: ACAPS con datos de FTS (consultado 28/03/2025)

## ACERCA DE ESTE INFORME

### Objetivo

Este informe analiza las implicaciones actuales y potenciales de la congelación de fondos y las órdenes de EE.UU. de detener labores en las operaciones y necesidades humanitarias en Colombia. Su objetivo es proporcionar a las principales partes interesadas un panorama general accesible de los nuevos retos operativos y estratégicos.

### Metodología

Este análisis se basa en una revisión de datos secundarios tomados de información disponible públicamente en fuentes humanitarias, gubernamentales y de los medios de comunicación. El análisis se complementa con los resultados preliminares de informes no publicados de ONG y tres entrevistas con informantes clave de ONG, que proporcionan una visión cualitativa para contextualizar e interpretar los datos cuantitativos disponibles. Todas las cifras financieras provienen del FTS, tanto para el Plan de Respuesta Humanitaria para Prioridades Comunitarias (HRPCP) como para el Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes (RMPRP), ambos financiados por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de EE. UU (PMR 18/03/2024).

### Limitaciones

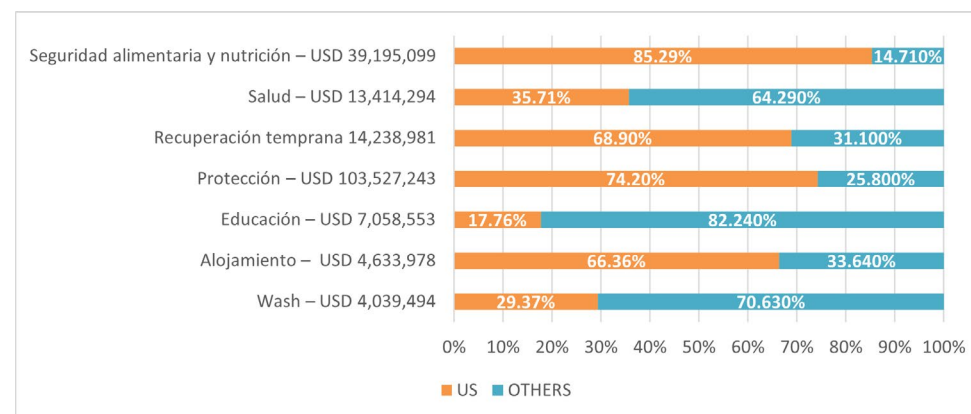
Este análisis se centra en las implicaciones de la congelación de fondos de Estados Unidos en la asistencia humanitaria en Colombia, en particular los fondos reportados a través del HNRP y el FTS administrado por OCHA. Esta es una limitación porque el FTS no captura todas las contribuciones humanitarias y hay actividades humanitarias y flujos de financiación que quedan fuera del HNRP. En consecuencia, es posible que este análisis no refleje todos los efectos de la congelación de fondos en la respuesta humanitaria más amplia.

La incertidumbre en torno al alcance de la congelación de la financiación, incluida la posibilidad de nuevos recortes, ha hecho que las organizaciones se muestren reacias a comunicarse abiertamente, lo que limita su voluntad de participar en entrevistas con informantes clave. Como resultado, la disponibilidad de datos primarios es limitada y puede haber un subregistro de las necesidades y los impactos. En particular, los efectos desagregados de la suspensión de la financiación en diferentes grupos de población y áreas geográficas siguen sin quedar claros.

Incluso si se levanta la congelación o si otros donantes intervienen, la interrupción ya ha limitado el acceso a los servicios esenciales, en particular para las poblaciones étnicas (indígenas y afrocolombianas), incluidas las confinadas y desplazadas por los GANE. La información sobre las estrategias de adaptación de las ONG sigue siendo limitada, ya que la estructura humanitaria todavía está en proceso de comprender y responder a todas las consecuencias de la congelación de la financiación.

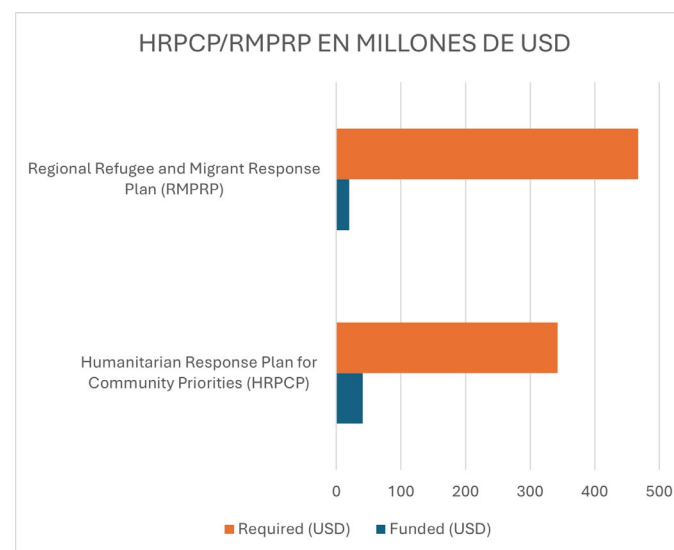
## POSIBLES EFECTOS EN LAS NECESIDADES

Figura 2. Contribuciones de financiación de EE. UU. a clústeres en 2024 (en USD), según lo informado a FTS.



Fuente: ACAPS con datos de FTS (Consultado 28/03/2025)

Figura 3. Financiamiento Total del Plan de Respuesta Humanitaria para las Prioridades Comunitarias y del Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes para 2025



Fuente: ACAPS con datos de FTS (Consultado 07/04/2025)



## Protección

Colombia enfrenta una prolongada crisis humanitaria impulsada por el conflicto armado, que se agrava aún más con la crisis migratoria venezolana y los efectos del cambio climático. Los riesgos relacionados con la protección siguen siendo la principal preocupación humanitaria en todo el país, especialmente en las zonas rurales (OCHA 22/01/2025). En 2024, el sector protección recibió USD 103,5 millones de los USD 123,6 millones requeridos, alcanzando una cobertura de financiación del 83,4%. De este monto, EE.UU. aportó USD 76,8 millones, lo que representa casi el 74% de la financiación total del sector, lo que lo convierte en el mayor donante del HRPCP (FTS consultado 26/03/2025).

Hasta marzo de 2025, EE.UU. había aportado 5,2 millones de dólares del total de 16 millones de dólares reportados por el sector de protección (FTS consultado el 26/03/2025). Esto marca una disminución significativa y pone de relieve el alcance de la dependencia de la financiación de los Estados Unidos para las actividades de protección.

Según el HRPCP 2024-2025, 5,2 millones de personas necesitan asistencia de protección en Colombia. De estos, 1,9 millones (34%) son indígenas y afrocolombianos, que se han visto afectados de manera desproporcionada por el conflicto armado. Del total de la población de Colombia, casi el 12% son indígenas y afrocolombianos (DANE 24/04/2024). Estas comunidades representan un tercio de todas las personas afectadas por el desplazamiento masivo (OCHA 22/01/2025). Entre los principales problemas de protección denunciados por estos grupos se encuentran el desplazamiento forzado y el confinamiento, cuando las comunidades no pueden circular libremente por los territorios en los que viven y se enfrentan a limitaciones de acceso a los servicios básicos (OCHA 12/03/2025; DRC 13/11/2024).

Las operaciones afectadas por el congelamiento de fondos se concentran en tres regiones estratégicas: el eje Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo, Urabá y Valle del Cauca); el eje fronterizo (Arauca, La Guajira, Norte de Santander y Santander); y el eje urbano (Antioquia, Atlántico, Bogotá y Córdoba) (OCHA 22/01/2025). Las organizaciones humanitarias se han visto obligadas a redefinir sus prioridades, centrándose a menudo en áreas donde las necesidades son elevadas pero los costes operativos son bajos. Es probable que en el próximo mes las zonas priorizadas incluyan regiones específicas con una alta gravedad de necesidades, pero con menos restricciones al acceso humanitario en términos de transporte de bienes, seguridad, infraestructura y despliegue (EIC 20/03/2025). Según la perspectiva del HRPCP, los programas de construcción de paz están estrechamente vinculados con iniciativas humanitarias y de desarrollo, lo que evidencia la necesidad de estrategias integradas en todos estos sectores (OCHA 15/03/2025). En la región de Urabá se han cerrado los programas dirigidos a migrantes y refugiados, y en zonas como Buenaventura y Chocó, la suspensión de proyectos de construcción de paz y desarrollo ha agravado aún más la crisis humanitaria. Los programas reportados como cerrados incluyen programas de sustitución de cultivos de coca en el Cauca y protección para adolescentes afectados por la violencia en el Chocó (OCHA 21/03/2025; EIC 20/03/2025; Reuters 18/03/2025; La República 04/02/2025).

Las consecuencias de la congelación de la financiación son dobles. En primer lugar, en el corto y mediano plazo, es probable que la reducción de la asistencia humanitaria aumente los riesgos de protección para las comunidades que ya enfrentan violencia sistemática como consecuencia de las disputas entre GANE en regiones como el Cauca, el Chocó y el sur del país. En segundo lugar, la suspensión de los programas relacionados con la ayuda humanitaria, la construcción de paz y su nexos, como el desarrollo rural, la recuperación económica y la consolidación de la paz, tendrá implicaciones a largo plazo, ya que muchas organizaciones comunitarias están perdiendo el acceso a la financiación de USAID, lo que socava los esfuerzos de protección dirigidos localmente (El País 10/03/2025). Para el 9 de marzo de 2025, organizaciones afrocolombianas e indígenas habían reportado cierres o graves impactos operativos. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados anunció su cierre, mientras que el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano reportó efectos significativos (El País 10/03/2025). Esta escasez de fondos de las organizaciones comunitarias tiene implicaciones humanitarias, ya que sus proyectos estaban relacionados con riesgos de protección vinculados con el desplazamiento interno y el reclutamiento (AFRODES Consultado 07/03/2025).

A principios de marzo de 2025, se había puesto fin a los programas de la OIM financiados a través de Weaving Lives and Hope y USAID, que apoyan a las víctimas de conflictos armados proporcionando apoyo psicosocial y acceso a servicios de salud mental (ACAPS, sin publicar). Estos cierres aumentan los riesgos de protección para las comunidades que viven en zonas de conflicto armado.

Los esfuerzos humanitarios para dismantelar minas en Colombia también se han visto directamente afectados por la congelación de fondos de Estados Unidos (EIC 20/02/2025). En 2024, la financiación para el desminado ascendió a casi 3 millones de dólares. Dado que Estados Unidos ha sido el principal donante de este esfuerzo, una reducción en el apoyo podría retrasar significativamente el progreso y aumentar los riesgos de protección para las comunidades en las áreas afectadas, en especial para los niños, niñas y adolescentes, que son la principal población afectada por las minas en las zonas rurales de Colombia. El 30% de todas las lesiones y muertes relacionadas con las minas (19 víctimas) reportadas en 2024 fueron niños, niñas o adolescentes, en un país en el que los este grupo representa el 28,4% de la población (FTS consultado 20/02/2025; Senado de Colombia 07/04/2024; ICBF consultado 10/04/2025).

La interrupción del financiamiento estadounidense también podría obstaculizar el progreso de Colombia hacia su objetivo de eliminar las minas antipersona para diciembre de 2025. Para diciembre de 2024, de los 1103 municipios del país, 523 habían sido declarados libres de contaminación sospechosa y continuaban las actividades de limpieza en otros 72 (Acción Contra Minas 31/01/2025).

La asistencia de protección para migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, en particular los venezolanos, que representan casi el 75% del total de las personas en tránsito, seguidos por los ecuatorianos (6%) y los haitianos (4%), se han visto significativamente afectados



por la congelación de fondos de EE.UU. (Migración Colombia consultado 15/04/2025). El apoyo se ha reducido tanto para la población pendular (migración de Colombia que viaja a otros países por trabajo) como para la población que permanece en el destino (EIC 20/03/2025; Noticias Caplin 25/03/2025; R4V 17/12/2024). El acceso a los servicios de protección también se ha visto afectado, incluido el apoyo a la regularización, la asistencia jurídica y la protección contra la trata, la explotación laboral y los riesgos de contratación (R4V 20/03/2025). Esta suspensión de la financiación también ha afectado a programas gubernamentales para migrantes y refugiados, limitando la capacidad operativa para brindar asistencia en los procesos de regularización. Un ejemplo notable es el programa 'Visibles', que proporcionó información sobre la regularización de migrantes y refugiados venezolanos. Financiado por Estados Unidos e implementado por la OIM, este programa se ha visto obligado a rescindir los contratos de su personal (EIC 21/03/2025; Infobae 03/02/2025).

Según el HRPCP de 2025, 3,8 millones de migrantes y refugiados necesitan asistencia para la protección, pero el sector de protección solo atiende al 10,5%. El principal plan que aborda estas necesidades, el RMRP, solo estaba financiado en un 33% a finales de 2024. Como el mayor donante, cualquier recorte a la ayuda humanitaria de Estados Unidos empeorará esta brecha de financiamiento, aumentando la vulnerabilidad económica y los riesgos de protección como la trata, la explotación y el reclutamiento de niños por parte de grupos armados (R4V 20/03/2025 y 17/12/2024; Infobae 10/02/2025; OCHA 22/01/2025).

Otros grupos que también pueden verse afectados por la congelación de fondos son las personas LGBTQ+, los sobrevivientes de la trata de personas y de VBG. Dado el conservadurismo del gobierno de los Estados Unidos, se espera que la asistencia sea limitada y pueda excluir el financiamiento para estos grupos (EIC 20/03/2025; El Espectador 05/02/2025).

En zonas como Antioquia al menos 82 ONG se han visto afectadas por la congelación de fondos de USAID, sin que las autoridades gubernamentales, locales o nacionales hayan ofrecido financiación alternativas (EIC 20/03/2025; Infobae 05/02/2025). Para el 11 de abril de 2025, no había información sobre si otros donantes u ONG han intervenido para cubrir los vacíos en los programas de protección. La congelación de la financiación ha puesto en evidencia la necesidad de que haya mejor coordinación estratégica entre las ONG, las instituciones gubernamentales y las comunidades, así como más claridad en la manera en que se priorizan los recursos disponibles (EIC 20/03/2025).

Persiste la incertidumbre en torno a cómo se posiciona la crisis de protección de Colombia dentro de los marcos globales de priorización basados en la severidad, ya que dichos marcos miden la escala de necesidad en una crisis humanitaria específica para determinar la asignación de recursos (Clúster de protección 04/07/2023). Esta incertidumbre despierta preocupaciones por la visibilidad que tiene el país en las decisiones de financiación internacional (EIC 20/03/2025).

## Seguridad alimentaria y nutrición

Para 2024, más de 7,3 millones de personas en Colombia necesitaban asistencia alimentaria (OCHA 15/03/2024). El Clúster de Seguridad Alimentaria era el segundo sector más financiado después del cluster de protección, recibiendo 39,1 millones de USD de los 80,7 millones necesarios, lo que representa una cobertura de casi el 48%. Las actividades humanitarias se concentraron principalmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y La Guajira (FTS consultado 27/03/2025).

Para marzo de 2025, la financiación había disminuido significativamente. De los USD 80,2 millones necesarios para el año, solo se han desembolsado USD 9,9 millones (12,3%). Aunque no es claro cuál es el alcance total de las contribuciones de EE. UU. al Clúster de Seguridad Alimentaria, los datos disponibles indican que las contribuciones que EE. UU. había pagado y con las que se había comprometido para 2025 ascendieron a solo USD 2,6 millones, lo que representa el 26,3% de la financiación actual y el 3,2% de las necesidades anuales totales (FTS consultado 27/03/2025).

Tras la congelación de la financiación de los Estados Unidos, se aplicaron medidas de priorización que se enfocan únicamente en las acciones de salvamento estrictamente necesarias en el marco del HRPCP y el RMRP, aunque no se dispone de la metodología específica ni de los detalles de la priorización (EIC 21/03/2025). Varias organizaciones han suspendido o reducido sus operaciones, entre ellas World Vision, Pastoral Social, el Consejo Danés para los Refugiados, el Consejo Noruego para los Refugiados y Acción contra el Hambre. Antes estas organizaciones habían dirigido actividades de asistencia alimentaria humanitaria orientadas a poblaciones afectadas por conflictos, migrantes y refugiados. Los departamentos más afectados por la reducción de operaciones incluyen Cauca, Chocó, La Guajira y Norte de Santander, donde las intervenciones a gran escala se han reducido significativamente (EIC 21/02/2025; R4V consultado 15/04/2025).

La congelación también ha interrumpido los esfuerzos liderados por las comunidades. Por ejemplo, organizaciones indígenas como la Organización Nacional Indígena del Cauca, que recibió fondos de USAID, han tenido que reducir las iniciativas de seguridad alimentaria destinadas a fortalecer la producción local y la cooperación en Chocó, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca (Consonante 11/02/2025).

Si se mantienen las tendencias actuales de financiación, es probable que el Clúster de Seguridad Alimentaria se enfrente a nuevas interrupciones técnicas y operativas, incluidos desafíos para desplegar personal, transportar alimentos y distribuir asistencia monetaria. Existe el riesgo de que estas interrupciones generen nuevos retrasos en la respuesta, lo que limita la capacidad de llegar a las poblaciones necesitadas (EIC 21/02/2025; FTS consultado 27/03/2025). Si persisten los déficits de financiación actuales, es probable que la asistencia



alimentaria se reduzca aún más, lo que afectará a la capacidad de respuesta durante los períodos críticos y aumentará los riesgos para los niños, los migrantes, los refugiados y las comunidades rurales en los que ya hay altos niveles de inseguridad alimentaria. Una disminución de la cobertura podría dar lugar a un menor número de raciones, una menor diversidad nutricional y deficiencias en los servicios durante períodos críticos, como la sequía estacional (diciembre-febrero), la estación lluviosa (mayo-julio) o la escalada del conflicto (ACAPS consultado 10/04/2025).

Según las proyecciones, se espera que 8,1 millones de personas necesiten asistencia alimentaria en 2025, de las cuales solo unas 900.000 recibirán ayuda humanitaria en el marco del HRPCP (Clúster de Seguridad Alimentaria consultado 05/12/2024). Según el PMA, 13 millones de personas se enfrentan a niveles de inseguridad alimentaria en crisis (Fase 3 del CIF) o superiores, en particular migrantes y refugiados, de los cuales el 37% tiene inseguridad alimentaria (PMA 01/2025). Los departamentos de Córdoba (70%), Sucre (63%), Cesar (55%), Bolívar (51%) y La Guajira (50%) han reportado los niveles más altos, impulsados por una combinación de conflicto armado, desplazamiento y débil presencia institucional (PMA 08/06/2023).

Los niños menores de cinco años son particularmente vulnerables a la inseguridad alimentaria. Para 2024, el 0,65% de los niños sufrían desnutrición aguda en todo el país, siendo las comunidades indígenas y afrocolombianas de las zonas rurales las más afectadas (PMA 02/05/2024; INS 24/04/2024). Si continúan los retrasos en la asistencia alimentaria, se prevé que aumentará el riesgo de malnutrición, especialmente entre los niños menores de cinco años y las mujeres embarazadas, lo que tendrá consecuencias para la salud a largo plazo (Clúster de Seguridad Alimentaria 13/03/2025).

## Salud

Según el HRPCP 2025, seis millones de personas en Colombia necesitan asistencia humanitaria relacionada con la salud. De estas, 634.100 personas recibirán atención, con un requerimiento financiero de USD 40,2 millones (OCHA 22/01/2025). Hasta marzo de 2025, la financiación total recibida para el sector ascendía a 6,6 millones de dólares, incluidos aproximadamente 1,3 millones de dólares del Gobierno de Estados Unidos (FTS consultado 27/03/2025).

A pesar de la insuficiencia de datos para evaluar plenamente las consecuencias de la desfinanciación, las evaluaciones preliminares del Clúster de Salud estiman que más de 683.700 personas están en riesgo como consecuencia del déficit de financiación, lo que supone un aumento con respecto al número de personas a las que estaba previsto atender. También se estima que más de 183.700 personas han perdido el acceso a los servicios de salud, incluidos los de salud mental, servicios médicos generales y diagnósticos. 106

establecimientos de salud también se han visto afectados directa o indirectamente, aunque aún no se dispone de información detallada sobre cómo los recortes de fondos los han afectado (Clúster de Salud 22/03/2025).

Los servicios de salud en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Cesar, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca son los más afectados por el congelamiento de fondos de Estados Unidos. Los servicios más afectados incluyen emergencias de salud, servicios de salud reproductiva y materna, apoyo a la salud mental y exámenes de laboratorio y de diagnóstico (Clúster de Salud 22/03/2025). También se han visto afectados programas como la iniciativa de donantes anónimos transformadores de Save the Children, que proporciona apoyo a la salud y la nutrición sexual y reproductiva de niños y mujeres embarazadas (FTS consultado 20/02/2025). Sin embargo, hasta el 11 de abril no había información sobre cómo se había visto afectado exactamente este programa, por ejemplo, si se habían suspendido las actividades, se habían reducido o se había despedido al personal.

Si las tendencias actuales de financiación continúan, es probable que más pacientes encuentren problemas como tratamientos no disponibles o interrumpidos, diagnósticos tardíos y acceso limitado a la atención preventiva. El colapso de las redes de derivación y la reducción de la capacidad de las brigadas médicas móviles pueden afectar especialmente a las comunidades remotas o rurales. Es probable que estas brechas se agraven durante los períodos de mayor demanda, como brotes de enfermedades o aumentos estacionales de enfermedades respiratorias y transmitidas a través del agua, lo que ejercerá una presión adicional sobre el sistema de salud pública y los trabajadores humanitarios.

La desfinanciación tiene implicaciones directas para los pacientes. Las personas pueden verse obligadas a viajar distancias más largas para acceder a la atención médica, asumir costos de bolsillo más altos y encontrar demoras en la recepción de diagnósticos y tratamientos. Es posible que las personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o VIH/SIDA, no puedan continuar el tratamiento de manera constante, lo que aumenta el riesgo de complicaciones, progresión de la enfermedad o incluso la muerte.

Los programas de salud materno-infantil se han visto gravemente afectados, amenazando los avances logrados en la reducción de la mortalidad materna y neonatal. Los servicios para el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo también se han interrumpido como resultado de la menor disponibilidad de tratamiento y pruebas (Clúster de Salud 22/03/2025). Los migrantes y refugiados venezolanos denuncian crecientes dificultades para acceder al tratamiento del VIH/SIDA (El Espectador 18/02/2025). Estas barreras pueden interrumpir los tratamientos, lo que aumenta el riesgo de progresión y transmisión de la enfermedad.

## WASH

En 2024, el Clúster WASH recibió USD 4 millones de los USD 10,5 millones requeridos. De esta cantidad, se estima que USD 1,2 millones provinieron del Gobierno de Estados Unidos (FTS consultado 27/02/2025). Para 2025, el HRPCP identifica a 4,3 millones de personas que necesitan asistencia en materia de WASH, con un objetivo de 448.400 personas y un requerimiento financiero total de 23 millones de dólares. Para marzo de 2025, solo se habían asegurado USD 2 millones (FTS consultado 27/02/2025). Los datos disponibles no permiten cuantificar la contribución de Estados Unidos a ese total.

Los datos disponibles tampoco especifican claramente qué actividades de WASH se han suspendido como resultado de la congelación de fondos de Estados Unidos. Sin embargo, los informes confirman que muchas ONG han suspendido sus operaciones en regiones como Norte de Santander, tras el desplazamiento masivo relacionado con el conflicto y el aumento de las necesidades humanitarias (OCHA 21/03/2025). Solo en este departamento, cerca de 18.000 personas desplazadas han encontrado barreras para acceder a los servicios de agua y saneamiento (3iS et al. 05/02/2025). Estas suspensiones sugieren una reducción en la distribución de agua de emergencia, el apoyo a la infraestructura de saneamiento y la provisión de kits de higiene para las poblaciones desplazadas y móviles, particularmente en zonas de alto riesgo como Cauca, Chocó y Norte de Santander.

Si los niveles de financiación siguen siendo bajos, las operaciones humanitarias de WASH pueden seguir detenidas o reducirse aún más, en particular en zonas remotas o afectadas por conflictos. Esto limitaría el acceso al agua potable y al saneamiento para las poblaciones en riesgo y reduciría la capacidad de los equipos de respuesta humanitaria para responder a nuevas emergencias, incluidas las inundaciones y los desplazamientos relacionados con el clima. La reducción de los servicios aumenta el riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por el agua, especialmente en asentamientos informales superpoblados y zonas de tránsito con gran movilidad demográfica (HOPE 18/02/2025; Wradio 01/04/2025).

En 2023, casi 3,2 millones de personas en Colombia encontraban barreras para acceder a los servicios de agua y saneamiento, 2,6 millones de las cuales vivían en zonas rurales de los departamentos de Amazonas, Chocó, Guainía, Providencia, Putumayo y San Andrés (Min Vivienda 18/11/2023). En un contexto de falta de financiación, las comunidades étnicas son de las que enfrentan mayor riesgo, y las estimaciones para 2025 proyectan que el 32% de las personas necesitadas pertenecen a comunidades afrocolombianas e indígenas (OCHA 22/01/2025). En estas comunidades, la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años por enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento, como las enfermedades diarreicas agudas, es superior a la media nacional (OCHA 22/01/2025).

Las personas migrantes y refugiadas en tránsito también se enfrentan a una mayor vulnerabilidad a la deshidratación, las enfermedades transmitidas por el agua y malas condiciones de salud relacionadas con la higiene como resultado del acceso limitado a los servicios WASH en las zonas rurales. En 2024 se reportaron limitaciones de este tipo en los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca (GIFMM et al. 06/02/2025). En el contexto de la reducción de la financiación, se espera que estos obstáculos empeoren, limitando la capacidad de las organizaciones humanitarias para mantener o ampliar las intervenciones en las zonas de tránsito remotas.

## Alojamiento

Para 2024, el Gobierno de EE. UU. estaba financiando USD 3,03 millones de los 4,6 millones en fondos totales para el sector de alojamiento (FTS consultado 20/27/2025). Según el HRPCP 2025, el sector de alojamiento requiere 8,9 millones de dólares en financiación, pero, para marzo de 2025, solo se habían asegurado 1,5 millones de dólares. De este monto, cerca de USD 1 millón corresponde a financiamiento del Gobierno de Estados Unidos (FTS consultado 27/03/2025). Para 2025, el sector identificó a casi cuatro millones de personas que necesitan asistencia en materia de alojamiento, con el objetivo de apoyar a 159.300 mediante diez proyectos ejecutados por siete organizaciones (OCHA 22/01/2025). Si bien no existe una comparación interanual específica de las contribuciones de Estados Unidos, la brecha de financiamiento actual es significativa. Para marzo, se había desembolsado aproximadamente el 23% del presupuesto anual requerido. Dado el aumento de las necesidades y el hecho de que la vivienda sigue siendo uno de los sectores menos financiados en Colombia, la actual brecha de financiamiento es una preocupación (OCHA 22/01/2025).

Si bien los detalles de las actividades suspendidas no están disponibles públicamente, es probable que los recortes hayan afectado intervenciones clave como la distribución de kits para refugios de emergencia, el apoyo a los refugios transitorios y la reparación de centros colectivos. Esto tiene implicaciones directas para las poblaciones desplazadas, que se pueden ver obligadas a permanecer en condiciones de vivienda inadecuadas o inseguras como consecuencia de ello (EIC 28/03/2025; OCHA 22/01/2025).

Si los niveles actuales de financiamiento persisten, los refugios tendrán dificultades para satisfacer las crecientes necesidades en toda Colombia. Se espera que los eventos de desplazamiento y confinamiento aumenten en 2025 a raíz de los conflictos armados, los peligros naturales y los efectos del cambio climático, en particular las inundaciones durante la temporada de lluvias de marzo en la región del Pacífico (Presidencia de Colombia 26/03/2025; OCHA 21/03/2025).

La reducción de las operaciones puede retrasar la entrega de refugios de emergencia, limitar la disponibilidad de espacios de vida seguros y dignos y debilitar la capacidad de recuperación de la comunidad tras el desplazamiento. En el primer trimestre de 2025 se registró un elevado número de desplazamientos individuales y masivos. En la región del Catatumbo, por ejemplo, las cifras de desplazamiento solo en los dos primeros meses de 2025 superaron el número total registrado para todo 2024 (OCHA 21/03/2025). El desplazamiento individual en Colombia se entiende generalmente como incidentes que involucran a menos de diez hogares o 50 personas. Aunque la ley no está definida formalmente, la Unidad de Víctimas registra numerosos casos de este tipo (ACAPS 02/12/2024).

La reducción de la asistencia en materia de alojamiento tiene consecuencias directas para las poblaciones afectadas. Las personas pueden enfrentarse a una exposición prolongada a entornos superpoblados, insalubres o inseguros, lo que aumenta los riesgos de protección, en particular para las mujeres y los niños, y aumenta la exposición a la VBG. Este acceso reducido también puede empeorar los resultados en materia de salud, incluidas las enfermedades respiratorias y la propagación de enfermedades transmitidas por el agua (EIC 28/03/2025).

## FACTORES AGRAVANTES

### Clima y peligros naturales

Es probable que los peligros relacionados con el clima agraven las necesidades humanitarias en Colombia, especialmente en las zonas rurales y afectadas por conflictos, y también que limiten aún más la capacidad de respuesta. En 2024, El Niño expuso a 2,9 millones de personas a sequías, incendios forestales e inundaciones, lo que provocó pérdidas de cosechas y escasez de agua en zonas dependientes de la agricultura. Cabe destacar que el 72% de estas emergencias ocurrieron en regiones afectadas por conflictos, lo que desbordó la capacidad de respuesta institucional (OCHA 22/01/2025).

Los pronósticos estacionales indican una probabilidad de lluvias por encima de lo normal en el centro y norte de Colombia y a lo largo de la costa del Pacífico. Se esperan temperaturas por encima de lo normal a lo largo de las costas del Caribe y el Pacífico y en el sureste, mientras que se pronostican temperaturas por debajo de lo normal cerca de la frontera noreste con Venezuela (IRI consultado 25/03/2025). Para el 14 de abril de 2025, aún había condiciones relacionadas con La Niña, y seguía siendo probable una transición a condiciones neutrales de El Niño y la Oscilación del Sur para agosto-octubre, lo que podría alterar los patrones de lluvias y temperatura (NOAA 14/04/2025). Estos patrones cambiantes podrían aumentar el riesgo de inundaciones localizadas, alteración de los cultivos y estrés relacionado con el calor, especialmente en las zonas rurales.

El cambio climático está intensificando los impactos de La Niña y El Niño, acelerando sus transiciones y acortando los períodos de condiciones neutrales (Cai et al. 18/05/2023). La puntuación de riesgo de cambio climático de INFORM de Colombia es de 5,5/10, alta (EC consultado 25/03/2025).

Esta interrupción del financiamiento coincide con un período crítico de variabilidad climática, ya que Colombia pasa de La Niña a El Niño y a condiciones neutrales de la Oscilación del Sur. Como resultado, las organizaciones humanitarias pueden verse obligadas a pasar de una acción anticipatoria a una respuesta reactiva, lo que reduce su capacidad para preparar a las comunidades para las crisis relacionadas con el clima. Al mismo tiempo, la capacidad general de respuesta puede debilitarse como resultado de la reducción de la financiación. Los recursos limitados se están reorientando a las emergencias, lo que aumenta el riesgo de que las comunidades más vulnerables al clima, en particular las poblaciones indígenas y afrocolombianas en zonas propensas a peligros, permanezcan desprotegidas contra los peligros climáticos y naturales actuales y futuros. Esto podría provocar nuevos desplazamientos y agravar las necesidades humanitarias existentes.

### Expansión y fragmentación de los GANE

La expansión y fragmentación de los grupos armados no estatales sigue impulsando las necesidades humanitarias en toda Colombia, especialmente en las zonas rurales donde hay importantes poblaciones afrocolombianas e indígenas (Pares 26/04/2024; FIP 13/02/2024). A lo largo de 2024, el Gobierno colombiano llevó a cabo negociaciones de paz con varios grupos armados en el marco de su política de "Paz Total", acompañadas de múltiples anuncios de alto el fuego. Sin embargo, el cumplimiento de los GANE ha sido inconsistente, y se ha informado de hostilidades continuas en varias regiones (HRW consultado 26/03/2025; El Colombiano 26/01/2025; Insight Crime 08/08/2024). Para diciembre de 2024, el 71% de los municipios de Colombia tenían presencia de GANE (DP 12/12/2024).

Las autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ha ampliado significativamente su presencia territorial, pasando de 213 municipios en 2019 a 345 en 2024, un aumento del 62%, lo que lo convierte en el grupo armado con mayor presencia en todo el país (DP 27/01/2025). Esto significa que las AGC ahora operan en casi un tercio de los 1122 municipios de Colombia, incluidas 18 áreas no municipalizadas (DANE consultado 07/04/2025). Esta expansión, junto con la fragmentación de los grupos armados, llevó a un aumento del 19% en las acciones armadas en 2024. Los enfrentamientos entre GANE, así como los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad colombianas, fueron los principales causantes de los desplazamientos masivos y los confinamientos. Aproximadamente el 33% de las personas desplazadas en eventos masivos en 2024 eran afrocolombianas, mientras que los indígenas representaron el 39% de los afectados por los confinamientos. Muchos de estos incidentes ocurrieron en zonas con derechos colectivos sobre la tierra, como reservas indígenas y consejos comunitarios afrocolombianos (OCHA 03/02/2025).



En enero de 2025, un aumento sin precedentes de la violencia en la subregión del Catatumbo provocó más de 51.800 desplazamientos masivos, más de 8.600 confinamientos y más de 20.000 restricciones a la movilidad. Como resultado, el número de personas desplazadas en eventos masivos durante enero-febrero de 2025 en Colombia superó el total reportado para todo 2024, lo que representa un aumento del 462% en comparación con el mismo período del año anterior (OCHA 21/03/2025). En enero de 2025, la fragmentación del Estado Mayor Central también generó preocupación por la escalada de violencia en los departamentos del sur, incluidos Amazonas, Caquetá, Guaviare, Huila, Meta y Putumayo (OCHA 10/02/2025; DP 21/01/2025).

La inseguridad y la posible escalada del conflicto armado representan riesgos importantes para la población civil y el acceso humanitario. Es probable que la población civil de las zonas rurales y remotas, en particular las comunidades indígenas y afrocolombianas, se enfrente a mayores riesgos de protección, desplazamientos, confinamientos, restricciones de movilidad e interrupciones en el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y la alimentación. Estos impactos son especialmente pronunciados en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, donde la presencia de GANE se superpone con altas necesidades humanitarias y una débil presencia estatal (OCHA 03/02/2025). En este contexto, la reducción de los fondos estadounidenses podría limitar la capacidad de los equipos de respuesta humanitaria para monitorear, prevenir y responder a este tipo de violencia.

### Acuerdo de paz y derechos a la tierra

La congelación de fondos de Estados Unidos ha afectado a las autoridades gubernamentales involucradas en la implementación del acuerdo de paz de 2016, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz, la Agencia Nacional de Tierras y los mecanismos relacionados con el Capítulo Étnico (El Espectador 29/01/2025). Si bien en marzo de 2025 el Gobierno de Estados Unidos restableció la financiación de un proyecto específico de la Jurisdicción Especial para la Paz, destinado a apoyar el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto armado, las implicaciones de la interrupción de la financiación aún no son claras (JEP 22/03/2025; SWI 22/03/2025).

USAID tuvo un rol central en el apoyo a la distribución de tierras y los esfuerzos de reforma agraria en Colombia. La reducción del apoyo a estos programas puede retrasar los procesos de titulación de tierras y prolongar la ausencia del Estado en las zonas rurales, lo que podría obstaculizar el cumplimiento de los derechos y servicios básicos (El Tiempo 09/10/2024). En regiones como Montes de María, donde la titulación colectiva de tierras permite el retorno de los desplazados internos a zonas de las que fueron expulsados por los grupos armados no estatales, la reducción de la capacidad institucional podría paralizar los esfuerzos de

restitución y reintegración (Unidad de Víctimas 04/04/2024). La incapacidad de recuperar la tierra y restablecer los medios de subsistencia puede contribuir a la reanudación de las tensiones o a la intensificación de los conflictos locales, especialmente en zonas donde el control territorial y el acceso a los recursos siguen siendo objeto de disputa.

En el contexto de la disminución de la asistencia extranjera para el desarrollo, la construcción de paz y la acción humanitaria, la capacidad institucional para promover la implementación de la paz se ve cada vez más limitada. Esto puede retrasar los procesos de restitución de tierras, paralizar los esfuerzos de reintegración y debilitar la recuperación de las comunidades en zonas previamente afectadas por el conflicto. La interrupción de la presencia y el apoyo institucional también puede socavar la confianza en el proceso de paz, reducir la cohesión social y aumentar el riesgo de violencia localizada, especialmente en comunidades con un historial de desplazamiento o exclusión.

### Políticas adicionales de EE. UU.

Los cambios en la política migratoria de EE. UU. entre enero y febrero de 2025, incluida la suspensión de la aplicación CBP One y el Estatus de Protección Temporal, han contribuido al surgimiento de flujos migratorios inversos hacia Colombia (USCIS consultado 25/02/2025; El País 20/03/2025; CBP 21/01/2025). CBP One es una aplicación móvil utilizada por los solicitantes de asilo para programar citas en los puntos de entrada fronterizos oficiales. Su suspensión ha reducido el acceso a los canales de migración regulares (CBP 21/01/2025). Al mismo tiempo, los cambios en el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa que otorga estatus legal temporal a ciudadanos de países que enfrentan crisis, han generado incertidumbre sobre el futuro de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en Estados Unidos (USCIS consultado el 25/02/2025). Estos cambios pueden estar fomentando los regresos o disuadiendo nuevas salidas.

Entre el 15 de enero y el 28 de febrero, las autoridades nacionales registraron el ingreso irregular a Colombia de 1.885 personas procedentes de Panamá vía Capurganá, en el municipio de Acaandí (Chocó). De estos, se caracterizaron 1.599 individuos: 1.585 (casi el 99%) eran de nacionalidad venezolana, y de ellos 298 (19%) eran niños, niñas y adolescentes. Los datos disponibles sobre el cruce fronterizo indican que los migrantes y refugiados venezolanos que ingresan a Colombia desde el norte aumentaron un 41% en comparación con el mismo período de 2024, lo que pone de manifiesto un cambio significativo en las tendencias de movilidad (Migración Colombia 10/03/2025).

Esta reciente tendencia de migraciones inversas, que se refiere al movimiento hacia el sur de migrantes y refugiados que inicialmente viajaron hacia el norte pero que están regresando debido a cambios en las políticas, ha ocasionado un aumento de las llegadas a Colombia

tanto por vía marítima como terrestre. Los costos de transporte marítimo que ascienden a USD 230 limitan la capacidad de algunas personas para continuar su viaje, lo que hace que los grupos permanezcan temporalmente en las zonas fronterizas, como Acandí, Juradó, Necoclí, Turbo (Antioquia) y Unguía (Chocó), con servicios limitados. Las comunidades reportan concentraciones diarias de entre 60 y 70 personas a la espera de registrarse y trasladarse a otros municipios, como en Necoclí y Turbo (El Espectador 21/03/2025).

El aumento de los flujos de retorno está presionando más la infraestructura local y la capacidad de respuesta en las zonas fronterizas con necesidades humanitarias preexistentes. La reducción de la financiación estadounidense para los programas de migración y protección puede limitar la capacidad de monitorear y responder a las dinámicas transfronterizas emergentes, incluido el aumento de los flujos de retorno y los impactos humanitarios localizados.

## ACCESO HUMANITARIO Y LIMITACIONES OPERATIVAS

---

La presencia activa de GANE sigue limitando el acceso humanitario en Colombia. En 2024 se registraron 208 incidentes relacionados con el acceso. De estos, el 37% involucró amenazas y violencia contra el personal y los bienes humanitarios; el 31% estaban vinculados a operaciones militares y hostilidades que perturbaban las actividades humanitarias; y el 28% se debió a las restricciones de circulación impuestas al personal y los suministros humanitarios. Los incidentes denunciados incluyeron el robo de vehículos humanitarios y artículos de socorro, así como amenazas verbales en las que se advertía de represalias físicas si las organizaciones continuaban sus operaciones en determinadas zonas. Los departamentos más afectados por estas limitaciones son Caquetá, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander (OCHA 03/02/2025).

Además de la inseguridad, las limitaciones operacionales derivadas de la superposición de crisis y los múltiples grupos de población en riesgo ponen aún más a prueba la capacidad de respuesta. Entre enero y febrero de 2025, solo el 22% de las 22 emergencias humanitarias desencadenadas por conflictos armados y peligros naturales recibieron asistencia en departamentos como Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca y Córdoba (OCHA 21/03/2025).

La suspensión de la financiación estadounidense ha reducido la capacidad general de las organizaciones humanitarias para responder a las emergencias, lo que ha obligado a los equipos de respuesta a reducir sus operaciones y limitar su alcance. Como resultado, muchas personas necesitadas siguen sin apoyo, lo que crea tensiones en las comunidades y genera preocupaciones en torno a la credibilidad y la rendición de cuentas (EIC 21/03/2025). Las organizaciones responsables de monitorear el acceso humanitario, como la Organización Internacional de ONG para la Seguridad, que ahora ha limitado sus operaciones en Colombia solo a las actividades de respuesta a emergencias, también se han visto afectadas (INSO 10/02/2025).

Para febrero de 2025, al menos 1.336 miembros del personal humanitario se habían visto directamente afectados por la congelación de la financiación estadounidense, ya sea por la reducción de la actividad operativa o por la incertidumbre en torno a la continuidad de la financiación (Foro de ONG, sin publicar). Las restricciones de acceso y las limitaciones operativas, agravadas por los recortes de financiación, están socavando la capacidad de las organizaciones humanitarias para satisfacer las crecientes necesidades en las zonas afectadas por el conflicto.

La reciente crisis en el Catatumbo (Norte de Santander) ejemplifica la gravedad de la situación actual. Para enero de 2025, más de 65.400 personas se habían visto afectadas por el desplazamiento masivo y el confinamiento en la subregión, lo que representa el 14,2% de todas las personas necesitadas en todo el país y marca la mayor emergencia humanitaria registrada en Colombia en más de una década (CODHES 24/01/2024).